

0068/2023

I

Tal y como dispone el artículo 1 del texto sometido a informe, constituye su objeto “desarrollar el Reglamento de Ejecución (UE) nº 2017/373 de la Comisión, de 1 de marzo de 2017, por el que se establecen requisitos comunes para los proveedores de servicios de gestión del tránsito aéreo/navegación aérea y otras funciones de la red de gestión del tránsito aéreo y su supervisión, por el que se derogan el Reglamento (CE) nº 482/2008 y los Reglamentos de Ejecución (UE) nº 1034/2011, (UE) nº 1035/2011 y (UE) nº 2016/1377, y por el que se modifica el Reglamento(UE) nº 677/2011 (en adelante el Reglamento), y disposiciones concordantes, para establecer el procedimiento de expedición, modificación, suspensión, limitación o revocación del certificado de proveedor civil de servicios meteorológicos de apoyo a la navegación aérea (en adelante, proveedor de servicios meteorológicos) así como regular los procedimientos de control normativo continuado de los citados proveedores de servicios”.

En este sentido, el citado Reglamento de Ejecución nº 2017/373 de la Comisión, de 1 de marzo de 2017, establece los requisitos comunes sobre a) la prestación de servicios de gestión del tránsito aéreo y de navegación aérea (“ATM/ANS”) para el tránsito aéreo general, en particular para las personas físicas o jurídicas que prestan tales servicios y funciones; b) las autoridades competentes, y los organismos cualificados que actúan en su nombre, que ejercen funciones de certificación, supervisión y ejecución con respecto a los servicios a que se refiere la letra a); y c) las normas y procedimientos para el diseño de estructuras del espacio aéreo.

En España, la norma que actualmente regula el proceso de certificación y de supervisión continua de los proveedores de servicios meteorológicos es la Orden MAM/1792/2006, de 5 de junio, por la que se regula el procedimiento de certificación de proveedores meteorológicos de apoyo a la navegación aérea, que —según expone el órgano consultante—debe ser actualizada para adaptarla a los cambios derivados de la nueva normativa desarrollada en el ámbito de la Unión Europea y, en concreto, al ya citado Reglamento de Ejecución de la Comisión, de 1 de marzo de 2017.

De este modo, el texto del Real Decreto que se informa deroga la vigente Orden, acometiendo la actualización del marco regulatorio nacional relativo a la supervisión de los proveedores de servicios meteorológicos para

adaptarlo a los nuevos requisitos exigibles, contemplando los nuevos servicios y funciones que deben ser certificados con el objeto de seguir garantizando la prestación de servicios segura y de alta calidad y el reconocimiento mutuo de certificados en toda la Unión, impulsando la libre circulación y la disponibilidad de estos servicios de navegación aérea.

Por su parte, la disposición transitoria cuarta del Real Decreto 500/2020, del 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, atribuye a la Subsecretaría del departamento la organización de las inspecciones, controles y estudios precisos para verificar que la prestación de los servicios meteorológicos se realiza en las debidas condiciones de seguridad y eficacia, así como la expedición de los certificados a dichos proveedores de servicios.

II

El texto sometido a informe debe analizarse atendiendo a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos, RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales —LOPDGDD—.

En primer lugar, ha de tenerse en cuenta que el artículo 4.1 del RGPD define datos personales como *"toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona"*.

A su vez, de acuerdo con el contenido de la *"Definición"* del punto 2 del propio artículo 4 del RGPD, para que exista tratamiento de datos de carácter personal, se requiere la realización de *"cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción"*. Por su parte, la definición de *"fichero"* se

contiene en el apartado 6 del artículo 4, que refiere a *"todo conjunto estructurado de datos personales, accesibles con arreglo a criterios determinados, ya sea centralizado, descentralizado o repartido de forma funcional o geográfica"*.

En atención a dichas definiciones, y a la vista del articulado que se informa, resulta claro que, por parte de los órganos competentes (i) tanto para la certificación de proveedores civiles de servicios meteorológicos, (ii) como para la realización de actuaciones de supervisión continuada de cumplimiento normativo, se llevarán a cabo tratamientos de datos de carácter personal en el sentido previsto por la normativa de protección de datos, constituyendo el objeto último de dichos tratamientos la inmatriculación de determinados datos en soportes físicos estructurados.

De tal modo, según el artículo 1 del proyecto, se pretende la reforma del procedimiento de expedición, modificación, suspensión, limitación o revocación del certificado de proveedor civil de servicios meteorológicos de apoyo a la navegación aérea, así como regular los procedimientos de control normativo continuado de los citados proveedores de servicios, y, según su artículo 2, la norma que se informa resultará también de aplicación a las actuaciones de cumplimiento normativo, todo lo cual incidirá, sin duda, en el tratamiento de los datos de carácter personal de los afectados, en el sentido definido por el RGPD.

El artículo 3 del borrador se refiere al "Ámbito subjetivo" de su aplicación, delimitando los sujetos (*"interesados"* en el sentido del artículo 4.1 RGPD —en la medida en que se trate de personas físicas identificadas y/o identificables, de acuerdo con la definición del citado precepto, o bien, estas se vieran afectadas a consecuencia del tratamiento de sus datos personales en el marco de la actividad desempeñada dentro de su organización, sin perjuicio de la excepciones establecidas en el artículo 19 LOPDGDD—) a los que serán aplicables los procedimientos mencionados en el artículo 2, a saber:

"1. Los procedimientos para la expedición, modificación, suspensión, limitación o revocación de certificados de proveedor civil regulados en el artículo 2.1 serán de aplicación a los proveedores de servicios meteorológicos que tengan su principal domicilio de actividad o, si procede, su domicilio social, en territorio español, así como a aquellos otros proveedores de servicios cuya certificación corresponda a la ANSMET en virtud de lo previsto en la normativa nacional y de la Unión Europea de aplicación.

2. La supervisión continuada del cumplimiento normativo será de aplicación a:
a) Los proveedores de servicios meteorológicos certificados por la ANSMET,
b) Aquellos proveedores de servicios meteorológicos certificados por una autoridad nacional de supervisión de otro Estado miembro de la Unión Europea cuya supervisión corresponda a la ANSMET conforme a la normativa de aplicación.

3. En los supuestos regulados en la letra b) del apartado 2, el control se realizará con sujeción a lo dispuesto en este real decreto y, en su caso, a los acuerdos celebrados con la autoridad nacional de supervisión responsable de la certificación."

Por su parte, el “responsable” de los tratamientos de datos realizados será la Autoridad nacional de supervisión de servicios meteorológicos de apoyo a la navegación aérea (ANSMET) —del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico—, cuyas atribuciones se establecen en el artículo 4 del proyecto, que será quien realice los tratamientos de datos de carácter personal de los afectados (*ex artículo 6 del texto que se informa*). La Memoria establece, respecto de este artículo 6 lo siguiente:

“Artículo 6. Tratamiento de la información

Este artículo se utiliza para establecer las directrices que se van a utilizar para el tratamiento de la información, garantizando el tratamiento confidencial y el buen uso de la información almacenada de modo que se autorice su difusión limitada solamente para garantizar la seguridad aérea o cuando así lo disponga la ley.”

Del contenido de dichas atribuciones deriva precisamente su condición de responsable, en tanto será quien decida sobre los fines y los medios necesarios en orden a la realización de los correspondientes tratamientos de datos, en el sentido del artículo 4.7 del RGPD, cuando dispone que es (7) «responsable del tratamiento» o «responsable»: **la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo** que, solo o junto con otros, **determine los fines y medios** del tratamiento; si el Derecho de la Unión o de los Estados miembros determina los fines y medios del tratamiento, el responsable del tratamiento o los criterios específicos para su nombramiento podrá establecerlos el Derecho de la Unión o de los Estados miembros.

El RGPD recoge la necesidad de establecer claramente el mapa de intervinientes en todo tratamiento de datos, al objeto de determinar con acierto la atribución de responsabilidades de acuerdo con la citada norma. Como punto de partida, debemos acudir a lo indicado en el Considerando 79 del RGPD que señala que “(...) La protección de los derechos y libertades de los interesados, así como la responsabilidad de los responsables y encargados del tratamiento, también en lo que respecta a la supervisión por parte de las autoridades de control y a las medidas adoptadas por ellas, requieren una atribución clara de las responsabilidades en virtud del presente Reglamento, incluidos los casos en los que un responsable determine los fines y medios del tratamiento de forma conjunta con otros responsables, o en los que el tratamiento se lleve a cabo por cuenta de un responsable (...)”.

A mayor abundamiento, en relación con la condición de responsable del tratamiento, conviene recordar lo dispuesto en las Directrices 7/2020 de 2 de septiembre de 2020, del Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD), “Sobre los conceptos de responsable y encargado en el RGPD”, que han sido objeto de adopción definitiva el 7 de julio de 2021:

“21. (...) En la mayoría de las situaciones, el «órgano determinante» puede identificarse fácil y claramente por referencia a determinadas circunstancias

*jurídicas o fácticas de las que normalmente puede inferirse la «influencia», a menos que otros elementos indiquen lo contrario. Se pueden distinguir dos categorías de situaciones: 1) el **control derivado de las disposiciones legales**; y 2) control derivado de la influencia fáctica. (...)*

*“24 (...) la ley establecerá una tarea o impondrá a alguien la obligación de recopilar y tratar determinados datos. En esos casos, la finalidad de la tramitación suele ser determinada por la ley. **El responsable será normalmente el designado por la ley para la realización de este propósito**, esta tarea pública (...) De manera más general, la ley también puede imponer a las entidades públicas o privadas la obligación de conservar o facilitar determinados datos. **Estas entidades normalmente se considerarían responsables** con respecto al tratamiento necesario para cumplir esta obligación.”*

III

La normativa de protección de datos contempla diferentes supuestos que pueden dar lugar al tratamiento de datos de carácter personal. De acuerdo con el artículo 6 –“Licitud del tratamiento”-, del RGPD, dicho tratamiento es lícito, y, por tanto, legítimo cuando:

“1. El tratamiento solo será lícito si se cumple al menos una de las siguientes condiciones:

a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos;

b) el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales;

c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento; (la negrita es nuestra)

d) el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona física;

e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento; (la negrita es nuestra)

f) el tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran la protección de datos personales, en particular cuando el interesado sea un niño.

Lo dispuesto en la letra f) del párrafo primero no será de aplicación al tratamiento realizado por las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones.”

Esta Agencia Española de Protección de Datos ha tenido oportunidad de analizar la base jurídica de los tratamientos de datos por las Administraciones públicas —entre otros— en sus Informes jurídicos 108/2018, 155/2018 y 175/2018. En dichos informes se expone que:

“II

En cuanto al sentido de la expresión “obligación legal” contenida en el artículo 6.1.c) RGPD, dicha expresión equivale, en la regulación española de protección de datos, a “obligación establecida en una norma con rango de ley”. El art. 53.1 de la Constitución (CE) establece que [l]os derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161.1.a). El derecho fundamental a la protección de datos personales se contiene en el art. 18.4 CE, y por tanto le es aplicable la necesidad de una ley para limitar el mismo.

A este respecto hay además que señalar que el Tribunal Constitucional ha interpretado los requisitos y circunstancias de la cesión de datos entre Administraciones Públicas, bajo la vigencia de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, (LOPD) en diversas sentencias, entre las que cabe destacar ahora la STC 17/2013, de 31 de enero (FJ 4º), y la STC 292/2000, de 30 de noviembre, a que hace referencia la anterior:

(...)

“Hay que recordar que la Administración está vinculada por el principio de legalidad, de manera que, a diferencia de los particulares, tan sólo puede llevar a cabo aquello para lo que el ordenamiento jurídico le permite expresamente. Este es el sentido de lo dispuesto en los artículos 9.1 y 103 de la Constitución, de suerte que cuando la ley y el derecho no han atribuido a la Administración las potestades correspondientes para actuar ante una determinada situación, esa actuación no podrá llevarse a cabo sin que previamente el ordenamiento le atribuya dichas potestades. No existe por tanto un espacio vacío donde a falta de ley pueda la Administración actuar. Es lo que se ha denominado la doctrina de la vinculación positiva de la Administración a la legalidad (García de Enterría). En consecuencia, para que la Administración pueda actuar necesita de una previa habilitación legal (entendida aquí legalidad como habilitación normativa). Y ello tanto si la Administración actúa en el ámbito del derecho público como el ámbito del derecho privado. Así podemos ver que incluso en este último ámbito, en el que actuaría en el mismo rango que los particulares, la Administración necesita una norma que le habilite a actuar.

(...)

*En cualquier caso, el RGPD excluye de la posibilidad de que los tratamientos realizados por las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones (sin distinguir si dichas funciones están sometidas al derecho público o al privado) puedan tener como base jurídica del tratamiento la letra f) del art. 6.1 RGPD, esto es, el interés legítimo. Ello, sin duda, porque parte de la base, como demuestra el considerando 45 RGPD, de que cuando se realice un tratamiento de datos en cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento o si es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos, dicho tratamiento ha de tener una base en el Derecho de la Unión o de los Estados miembros. En definitiva, dicho tratamiento de datos estará amparado por **la letra e) del art. 6.1** si el derecho aplicable ha atribuido una competencia a la Administración, y no lo estará en caso contrario. (la negrita es nuestra (...))”*

Así, esta AEPD, en el citado Informe 0175/2018, sostiene que “Con carácter general, la base jurídica del tratamiento en las relaciones con la Administración, en aquellos supuestos en que existe una relación en la que no puede razonablemente predicarse que exista una situación de equilibrio entre el responsable del tratamiento (la Administración), y el interesado (el administrado) no sería el consentimiento (art. 6.1.a) RGPD), sino, según los casos, el cumplimiento de una obligación legal (art. 6.1.c) RGPD) o el cumplimiento de una misión de interés público o en el ejercicio de poderes públicos (art. 6.1.e) RGPD).”

A este respecto, el artículo 8 de la LOPDGDD, que lleva por rúbrica “Tratamiento de datos por obligación legal, interés público o ejercicio de poderes públicos”, en su apartado 2, dispone que:

“2. El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1 e) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando derive de una competencia atribuida por una norma con rango de ley.”

Por consiguiente, para que el tratamiento pueda ampararse en los apartados c) o e) del artículo 6.1 del RGPD, se requiere que una norma con rango de ley, o de derecho de la UE, atribuya la competencia, competencia que, de acuerdo con el principio de vinculación positiva de la Administración a la ley, únicamente podrá ejercerse en los términos y dentro de los límites en que haya sido atribuida por dicha norma legal y, en su caso, por los preceptos reglamentarios que la desarrollen.

En el supuesto objeto de informe, la base jurídica que justifica el tratamiento de la información con datos de carácter personal se incardina en el apartado e) del artículo 6.1 RGPD, toda vez que el proyecto que se analiza regula el procedimiento administrativo para el ejercicio de una competencia atribuida al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, como

autoridad nacional de supervisión de los servicios meteorológicos de apoyo a la navegación aérea. Así, el Preámbulo del Proyecto de Real Decreto sometido a informe señala que el Reglamento (CE) nº 549/2004 establece que los Estados designarán o crearán un órgano u órganos que actuarán en calidad de autoridad nacional de supervisión con la responsabilidad de supervisar la prestación segura y eficaz de servicios de navegación aérea y de controlar el cumplimiento por parte de los proveedores de servicios de navegación aérea de los requisitos comunes establecidos a nivel comunitario. Con este fin, -continúa- organizarán las inspecciones y los estudios adecuados para verificar el cumplimiento de los requisitos del citado reglamento. En aplicación de lo dispuesto en dicho precepto, España ha designado tres autoridades nacionales de supervisión, en adelante ANS: la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, como ANS de los proveedores civiles de servicios de navegación aérea, distintos de los proveedores de servicios meteorológicos; el Estado Mayor del Ejército del Aire como ANS de los proveedores militares de servicios de navegación aérea para la circulación aérea general; **y la Subsecretaría para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, como ANS de los proveedores de servicios meteorológicos de apoyo a la navegación aérea.**

En definitiva, la necesidad de nombramiento y la determinación del responsable deriva de la norma con rango suficiente *“para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento”* conforme al art. 6.1.e) RGPD.

En consecuencia, en relación con la base jurídica del tratamiento en el texto que se analiza, podría informarse de que el tratamiento responde a la base de legitimación del artículo 6.1.e) del RGPD, por ser necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.

IV

El tratamiento de la información derivada de la promulgación de la norma que se informa se regula en su artículo 6, en el que se señala que:

“1. La ANSMET archivará en formato electrónico los datos correspondientes a las actuaciones de supervisión continuada del cumplimiento normativo, los resultados de las mismas, los informes de actuación y los dictámenes técnicos, con el fin de garantizar el tratamiento homogéneo de la información y, en su caso, su explotación estadística.

2. Se adoptarán las medidas necesarias para asegurar el tratamiento confidencial y el buen uso de la información almacenada, así como la adecuada tutela de la información que contenga datos personales. Asimismo, sólo se autorizará una difusión limitada cuando sea necesario para garantizar la seguridad aérea o cuando así lo disponga expresamente otra ley.”

En consecuencia, en dicho precepto se establecen las directrices que utilizarán para el tratamiento de la información, garantizando el tratamiento confidencial y el buen uso de la información almacenada de modo que se autorice su difusión limitada solamente para garantizar la seguridad aérea o cuando así lo disponga la ley, lo cual resultaría solo parcialmente conforme con lo dispuesto en la normativa de protección de datos. Esto es, si bien el artículo 6 del borrador se refiere al adecuado tratamiento confidencial, buen uso, y a la garantía de la seguridad, no se señalan expresamente en la norma cuáles serán dichas medidas de cumplimiento normativo.

En consecuencia, por parte del órgano consultante, podría incorporarse un nuevo párrafo que, adicionado al texto presentado a informe, señale —al menos por vía de remisión, de manera explícita— **que el tratamiento de los datos de carácter personal se realizará con estricta sujeción al RGPD y a la LOPDGDD.**

Por lo demás, el resto de los preceptos, relativos al procedimiento para la expedición, modificación, suspensión, limitación o revocación de los certificados como proveedor de servicios meteorológicos de apoyo a la navegación aérea, se someten expresamente a lo dispuesto en el propio real decreto y, en su defecto, a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, estableciéndose el modo en el que las organizaciones interesadas en certificarse como proveedor de servicios meteorológicos deben presentar la solicitud, a quién deben ser dirigidas y los medios para su presentación (artículos 7 y 8 del proyecto).

Según se infiere de los citados preceptos, así como del contenido del artículo 10, Documentación para la certificación; artículo 11, Modificación del alcance del certificado; artículo 12, Supervisión del cumplimiento de requisitos; y artículo 13, Resolución del procedimiento de expedición del certificado y su modificación, para el ejercicio de los poderes conferidos al responsable del tratamiento por la normativa aplicable, dicho responsable —ANSMET—, deberá servirse de ficheros con datos de carácter personal, definidos en el artículo 4.6 RGPD como *“todo conjunto estructurado de datos personales, accesibles con arreglo a criterios determinados, ya sea centralizado, descentralizado o repartido de forma funcional o geográfica”*, si bien cabe suponer que corresponda a otras normas reglamentarias de desarrollo la concreción de la naturaleza de tales ficheros, así como la de los datos susceptibles de inscripción en estos (ex Disposición final segunda del proyecto).

Asimismo, sin perjuicio de la licitud del tratamiento, el mismo deberá cumplir también con el resto de *los principios de protección de datos*, cuyo respeto, garantía y cumplimiento deberán guiar la actuación del órgano consultante en relación con su actividad con incidencia en el tratamiento de la información personal de las personas afectadas.

“Principios relativos al tratamiento

1. Los datos personales serán: a) tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado («licitud, lealtad y transparencia»); b) recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines; de acuerdo con el artículo 89, apartado 1, el tratamiento ulterior de los datos personales con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos no se considerará incompatible con los fines iniciales («limitación de la finalidad»); c) adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados («minimización de datos»); d) exactos y, si fuera necesario, actualizados; se adoptarán todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación los datos personales que sean inexactos con respecto a los fines para los que se tratan («exactitud»); e) mantenidos de forma que se permita la identificación de los interesados durante no más tiempo del necesario para los fines del tratamiento de los datos personales; los datos personales podrán conservarse durante períodos más largos siempre que se traten exclusivamente con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, de conformidad con el artículo 89, apartado 1, sin perjuicio de la aplicación de las medidas técnicas y organizativas apropiadas que impone el presente Reglamento a fin de proteger los derechos y libertades del interesado («limitación del plazo de conservación»); f) tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada de los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas («integridad y confidencialidad»).

2. El responsable del tratamiento será responsable del cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 y capaz de demostrarlo («responsabilidad proactiva»).”

Finalmente, tal y como se adelantó, el proyecto normativo objeto de informe se refiere a la adopción de las *medidas necesarias para asegurar el tratamiento confidencial y el buen uso de la información almacenada, así como la adecuada tutela de la información que contenga datos personales*. Asimismo, sólo se autorizará una *difusión limitada cuando sea necesario para garantizar la seguridad aérea o cuando así lo disponga expresamente otra ley* (artículo 6.2 del proyecto).

Sin embargo, en relación con la **seguridad en el tratamiento de los datos de carácter personal** objeto del real decreto, **no se contiene previsión alguna** en el texto que se informa, careciendo la norma de ninguna regulación al respecto.

En este sentido, el artículo 24.1 RGPD dispone que *“Teniendo en cuenta la naturaleza, el ámbito, el contexto y los fines del tratamiento, así como los riesgos de diversa probabilidad y gravedad para los derechos y libertades de las personas físicas, el responsable del tratamiento aplicará medidas técnicas y*

organizativas apropiadas a fin de garantizar y poder demostrar que el tratamiento es conforme con el presente Reglamento. Dichas medidas se revisarán y actualizarán cuando sea necesario”.

A su vez, en relación con la seguridad de la información, el artículo 32.1 establece que *“Teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación, y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como riesgos de probabilidad y gravedad variables para los derechos y libertades de las personas físicas, el responsable y el encargado del tratamiento aplicarán medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo”.*

Asimismo, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 3 del **Real Decreto 11/2022, de 3 de mayo**, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad:

“Artículo 3. Sistemas de información que traten datos personales.

1. Cuando un sistema de información trate datos personales le será de aplicación lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, o, en su caso, la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales, el resto de normativa de aplicación, así como los criterios que se establezcan por la Agencia Española de Protección de Datos o en su ámbito competencial, por las autoridades autonómicas de protección de datos, sin perjuicio de los requisitos establecidos en el presente real decreto.

2. En estos supuestos, el responsable o el encargado del tratamiento, asesorado por el delegado de protección de datos, realizarán un análisis de riesgos conforme al artículo 24 del Reglamento General de Protección de Datos y, en los supuestos de su artículo 35, una evaluación de impacto en la protección de datos.

3. En todo caso, prevalecerán las medidas a implantar como consecuencia del análisis de riesgos y, en su caso, de la evaluación de impacto a los que se refiere el apartado anterior, en caso de resultar agravadas respecto de las previstas en el presente real decreto.”

En consecuencia, se sugiere que se incorpore explícitamente, en el texto que se informa una mención al nuevo régimen de protección de datos, basado en la necesidad de realización del análisis de riesgos establecido en el artículo 24 del Reglamento para la determinación de las medidas que garanticen adecuadamente la seguridad de la información desde el enfoque de la

protección de datos de carácter personal, proponiéndose —a tales efectos— la siguiente redacción:

Tratamientos de datos de carácter personal.

1. Los tratamientos de datos de carácter personal de las personas físicas que sean necesarios para la aplicación del presente real decreto se realizarán con estricta sujeción a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

2. El tratamiento de los datos personales se encuentra amparado por lo dispuesto en el artículo 6.1.e) del Reglamento (UE) 2016/679, al realizarse para el cumplimiento de una misión de interés público y en el ejercicio de potestades públicas.

3. Los sistemas de información que traten datos personales deberán garantizar la aplicación de las medidas técnicas y organizativas que resulten del correspondiente análisis de riesgos conforme al artículo 24 del Reglamento General de Protección de Datos y, en los supuestos de su artículo 35, una evaluación de impacto en la protección de datos por el responsable o el encargado del tratamiento, asesorado por el delegado de protección de datos, en los términos previstos en el artículo 3 del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad.